

INFORME N° 005 - 20

TEMA

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Adicional establecido por el Artículo 100 Ley N° 15170. Resolución Normativa 31/2020. Agentes de Recaudación.

DIRECTOR EJECUTIVO

Se requiere pronunciamiento respecto de la situación que seguidamente se pasa a exponer:

ANTECEDENTES

Se inician estas actuaciones como consecuencia de la consulta efectuada por la apoderada del Consorcio de Gestión del Puerto “XX”, con el objeto de realizar una consulta respecto de *“lo normado en el artículo 100 de la Ley 15.170 y la Resolución Normativa 31/2020...”*.

Comienza citando el artículo 1° de la Resolución mencionada y explica que el Consorcio no cuenta con la documentación respaldatoria que contenga la información necesaria para verificar alguno de los requisitos exigidos, esto es *“que la mercadería tribute ingresos brutos...; que aplique a las actividades detalladas en el artículo 100...; que exploten terminales portuarias...”*. Por tales razones, solicita se le informe si sería válida una declaración jurada suscripta por las terminales portuarias y si, en su caso, ésta debería revestir alguna formalidad.

Seguidamente, cita los artículos 4° y 6° de la Resolución Normativa mencionada y consulta si a los fines de cumplir con la obligación de actuar como agentes de recaudación, podrían emitir una *“orden de venta”* o una *“orden de débito”* a efectos de exigir el pago del adicional.

Por último, trae a colación lo establecido en el artículo 11 de la citada Resolución Normativa N° 31/20 que regula la obligación de los agentes de recaudación de informar acerca de las recaudaciones realizadas en el mes anterior, y sostiene que no se establece el procedimiento que debe seguirse *“... en caso de que el contribuyente no abone el tributo en tiempo y forma y el Consorcio lo haya intimado al pago sin éxito”*. En el mismo sentido solicita, saber si a los fines de cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (Ley N° 10397 t.o.

2011 y mods), es suficiente la notificación por carta documento y, en su caso, “... que ARBA especifique qué acciones deberán tomar los consorcios para dar por acreditado la exigibilidad del tributo”.

TRATAMIENTO Y CONCLUSIÓN

Mediante el artículo 100 de la Ley N° 15170 se estableció un “... un incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos...” aplicable a ciertas actividades específicamente enumeradas de conformidad a lo previsto en el Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB18), “... en lo vinculado a la explotación de terminales portuarias ubicadas en puertos de la provincia de Buenos Aires...”. Dicho incremento debe abonarse en forma mensual, es adicional al monto de gravamen que resulta de la aplicación de la alícuota prevista para tales actividades y se debe liquidar en función de un importe dinerario distinto, según se trate de mercadería cargada, descargada o removida.

Asimismo, la norma legal referida, prevé la no aplicación del incremento adicional en cuestión respecto de: mercadería en tránsito, reembarque para transbordo y/o en tráfico; arena, piedra y otros productos áridos; mercadería vinculada con la actividad pesquera de los buques y embarcaciones que operan desde los puertos y apostaderos bonaerenses, productos de la pesca artesanal y acuicultura.

Con relación a la primera cuestión planteada, esto es si el Consorcio consultante podría exigir una declaración jurada de las terminales portuarias, a los efectos de contar con la información que resulte menester para recaudar el incremento adicional, se estima ello viable en el marco de la reglamentación que creó al referido Consorcio, esto es el Decreto N° “...”. En tal sentido, se advierte que el ente de que se trata, “... en su condición de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena capacidad legal de conformidad con las disposiciones del Código Civil sobre la materia, para realizar todos los actos jurídicos, celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones” (cf. art. 3).

Asimismo, según surge del artículo 7° Inciso j) de la citada reglamentación, entre sus funciones se prevé la de “ejercer en su ámbito de actua-

ción las funciones públicas de fiscalización y control en las materias que se le deleguen...".

Por lo tanto, en el marco de dichas previsiones se entiende factible la implementación de un procedimiento por parte del Consorcio a los fines aquí analizados. Es justamente en tal orden de situación que han procedido a dictar normas con dicha finalidad otras entidades incluidas en las previsiones del artículo 100 de la Ley N° 15170 y la Resolución Normativa N° 31/20; tal el caso de los Consorcios de Gestión del Puerto de General Rosales (cf. Resolución N° 3/20) y del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (cf. Disposición N° 137-CGPCC-2020).

En lo relativo a si resulta posible emitir una orden de venta o una orden de débito, a los fines de actuar como agente de recaudación y exigir el pago del incremento adicional respectivo, cabe destacar que tal aspecto se encuentra regulado en la Resolución Normativa N° 31/2020 la cual, en su artículo 8° establece la obligación de extender un comprobante especialmente previsto. Expresa dicha prescripción: *"El agente deberá extender un comprobante de la recaudación efectuada mediante el formulario A-122P que integra el Anexo I de la presente y que podrá ser obtenido a través de la página web de la Agencia.*

Dicho comprobante constituirá para el contribuyente suficiente y única constancia a los fines de acreditar la recaudación. En el comprobante se indicará...

En definitiva, no corresponde expedir por parte de los responsables por deuda ajena de que se trata, ningún otro tipo de comprobante que no sea el A-122P, para su entrega a los sujetos pasibles de recaudación.

Por último, en cuanto al procedimiento que debe seguirse en caso de que el contribuyente no abone el importe requerido en tiempo y forma, en el marco de lo establecido en el artículo 24 del Código Fiscal, cabe efectuar las siguientes consideraciones. Dispone la citada norma legal:

"Los responsables indicados en los artículos 21 y 22, responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes.

Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.

Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes.

Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales...

El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo."

Al respecto, cabe expresar que el planteo formulado por el presentante importa resolver acerca de una cuestión de hecho ajena a la instancia consultiva prevista en el artículo 25 del Código Fiscal (Ley N° 10.397 t.o. 2011 y mods.) sustento de la emisión de esta respuesta.

En efecto, la norma precedentemente transcrita prevé acerca de la responsabilidad solidaria de los sujetos contemplados en los artículos 21 y 22 del ordenamiento fiscal, entre ellos la de los agentes de recaudación (art. 21 inciso 4.). Asimismo, dispensa de tal efecto a dichos responsables por deuda ajena, en la medida que los mismos acrediten "... haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva".

Por lo tanto, y asimismo en virtud de lo que dispone el último párrafo de la norma ahora analizada ("El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables..."), es en el marco de un procedimiento tendiente a determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que deberá discernirse si el agente de recaudación ha tomado las medidas necesarias a los fines de resguardar el ingreso del incremento adicional (en la especie).